

RAZONES POR LAS CUALES ES NECESARIO CONSOLIDAR LA MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO

Síntesis, Febrero 04 del 2002

Los resultados del populismo

El intervención económica practicada por los gobiernos de 1951-1993, provocó guerras internas; permitió a determinados grupos oprimir a sus conciudadanos; produjo depresiones económicas y desempleo en masa; consumió grandes capitales; y desató hambre y miseria.

Los intelectuales del sistema intervencionista siguen diciendo que esas indeseadas repercusiones son consecuencia de la economía de mercado, que todavía no ha sido debidamente extirpada. Según esos intelectuales, tales desastres evidencian lo necesario que es intensificar aún más la injerencia estatal en la economía. El fracaso del sistema intervencionista es interpretada de tal forma que, lejos de debilitar, vigoriza el *prestigio* de su *fundamento* teórico. Y, sin embargo, la intervención se está extinguiendo, a medida que van desapareciendo aquellas reservas, antes acumuladas, que tan inconscientemente se derrochan.

El agotamiento de los recursos

El fundamento teórico del sistema intervencionista se apoya en suponer que las rentas y patrimonios de los ricos constituyen fondo inacabable, al que cabe recurrir para mejorar la suerte de los pobres. El intervencionista quiere despojar a unos en beneficio de otros. Para el intervencionista todo se reduce a confiscar y redistribuir. Cualquier medida queda justificada si “arrebata” al rico y beneficia al pobre.

Los impuestos como el progresivo a la renta del 27%, el IGV 19%, el ISC 21%, los aranceles escalonados de 5%, 15%, 20% , 50%, el predial, los cánones, y muchísimos otros en el campo fiscal, son el arma de la intervención. Se pretende gravar a los que más tienen, para luego invertir lo recaudado en una supuesta mejora de los pobres.

En el campo laboral se aspira a reducir las horas de trabajo, incrementar continuamente los salarios nominales e implantar otras medidas que asegure favorecer al trabajador, con daño tan sólo al empresario.

Un ejemplo nos brinda la gestión de las empresas estatizadas o municipalizadas. Dichas empresas, arrojan pérdidas; sus pérdidas suponen pesada carga para los sistemas de recaudación estatal y municipal. No interesa dilucidar si tales pérdidas son resultado de una torpe administración o si son consecuencia, al menos en parte, de la insuficiencia de las tarifas públicas establecidas. Basta destacar que tales pérdidas acaban recayendo sobre las espaldas de los contribuyentes. Sin embargo, esto no preocupa al dirigista, quien rechaza las dos soluciones que resolverían la situación: privatizar la explotación

de todos los servicios públicos; o elevar las tarifas en lo necesario para que el usuario financie el costo del servicio. Rechaza: la primera solución por el carácter *reaccionario* de la misma, convencido de que el mundo “marcha” hacia continua y progresiva estatización; y la segunda solución, por su condición *antisocial*, ya que exige mayor esfuerzo financiero a los consumidores. Piensa que lo más justo es obligar a la gente de mayores recursos, a que soporten las correspondientes cargas tributarias. La «capacidad de pago» de esta gente es superior a la capacidad del usuario pobre de los servicios públicos estatizados y municipalizados. Exigir que tales servicios públicos se autofinancien es viejo recuerdo de una ya superada economía “sin rostro humano”. Concluye que con igual fundamento cabría pretender que las carreteras o la enseñanza pública se autofinanciaran.

Para aplicar el principio de la «capacidad de pago», es necesario que existan rentas y patrimonios susceptibles de ser gravados. Es imposible recurrir al sistema intervencionista si dichas reservas se han desvanecido bajo la “dictadura” del fisco y las medidas intervencionistas de moda.

Analizando el problema de la financiación del sistema intervencionista. El intervencionista no se da cuenta (al estar a favor por el incremento continuo del gasto público) que los fondos disponibles son limitados. Desconoce que si se incrementa el gasto en determinados sectores, paralelamente habrá de reducirse la inversión en otros sectores. Para el intervencionista, el dinero constituye inagotable riqueza. En su opinión, cabe disponer sin límite ni control, de las rentas y patrimonios de «los ricos». Por ejemplo, cuando postula incrementar los gastos destinados a financiar la creación de bancos estatales de fomento y diversos subsidios, se limita a exteriorizar su personal deseo de que se reactive el agro y las empresas. Pero poco piensa de si tal vez no convendría mejor, desde un punto de vista social, incrementar otros gastos, como los de salud y educación. No ve las razones de peso, las cuales están a favor por la reducción del gasto público y el consiguiente amortiguamiento de las cargas fiscales. Piensa que la disminución de la inversión pública sólo pueden reclamarla “comprados” defensores de los intereses de los ricos.

Esos fondos que el intervencionista piensa dedicar a financiar inacabables gastos públicos están rápidamente evaporándose al calor de los vigentes impuestos sobre las rentas, patrimonios y otros. En el país el alza de impuestos no ha conseguido aumentar notoriamente la recaudación; toda vez que con patrones de medida mucho menos progresivos, los gobiernos hubieran conseguido ingresos muy similares a los que en la práctica obtiene. Los elevados porcentajes que gravan las rentas más elevadas; concitan el caluroso elogio de los dirigistas, pero lo cierto es que aportan sumas muy pequeñas al tesoro público. No es posible financiar los excesivos gastos públicos simplemente «exprimiendo al rico»; los pobres sin saberlo, están soportando una parte importante de tan pesada carga tributaria. Cada día que pasa se ve que es más inocultables; lo absurdo de los sistemas tributarios de la era de la intervención; amparados en la idea de que el gobierno gaste cuanto quiera y financie tales derroches a base de impuestos progresivos. No tiene sentido la popular y falaz teoría según la cual el Estado (a diferencia de la gente que han de acomodar sus gastos a los ingresos efectivamente obtenidos) puede determinar los gastos que desea efectuar, cualquiera que sea su monto; y, después, conseguir, por unos medios u otros, las recaudaciones correspondientes. Ni a gobernantes y gobernados les va a ser lícito en adelante seguir cerrando los ojos ante realidades como la de: que no cabe gastar dos veces un mismo sol o que el incremento

de cualquier partida del presupuesto exige la paralela reducción de otra u otras partidas. En adelante, cada gasto adicional habrá de ser financiado por quienes hasta ahora han procurado siempre desviar hacia terceros la carga tributaria. Quien solicite subsidios deberá estar dispuesto a soportar, por otra vía, los correspondientes costos. La gente pronto van a tener que soportar, íntegramente, las pérdidas de las empresas nacionalizadas.

Será igual el planteamiento referente a las relaciones entre empresarios y trabajadores. La gente cree que las «conquistas sociales» de los trabajadores se obtienen con cargo a las «no ganadas» rentas de los empresarios explotadores. Se dice: que la huelga no va dirigida contra los consumidores sino contra «el capital»; no hay motivo para elevar los precios cuando ocurran alzas salariales; por el contrario, deben ser los empresarios, quienes absorban íntegramente tales alzas. Todo esto está bien mientras haya beneficios empresariales a repartir; pero cuando estos beneficios progresivamente se reducen a causa: de la creciente carga tributaria, de los continuos incrementos salariales, de las nuevas «conquistas sociales» y del control de los precios de venta; pronto ha de llegar el momento en que el juego terminará. Cualquier aumento de salarios, en tal caso, habrá de tener su pleno reflejo en los precios; lo que unos grupos ganen otros tendrán que perder. El huelguista, inmediatamente dañará los intereses del público.

El intervencionista parte de la existencia de unos inagotables fondos ajenos que cabe perennemente exprimir. Sin embargo, sus ideas se desmoronan apenas se agota la fuente que parecía inacabable.

La caída del populismo

La intervención ha de desaparecer por cuanto no cabe, a su amparo, organizar de modo permanente la sociedad; 3 razones conduce a tal conclusión:

1º Las medidas restrictivas de la producción reducen el volumen de bienes de consumo disponibles. Por más que se pretenda defender las específicas restricciones o prohibiciones no es posible montar un sistema productivo en base a esas medidas.

2º Toda intervención que perturba la operación del mercado: deja de alcanzar los objetivos deseados; y provoca situaciones que el dirigista (desde el punto de vista de sus propias valoraciones) considera peores que aquéllas situaciones que pretendía remediar. Sí para corregir tan indeseados efectos recurre a intervenciones cada vez más amplias, paso a paso destruye la economía de mercado, implantando en su lugar el estatismo.

3º El intervencionista pretende reducir la “excesiva” riqueza de unos para dárselos a otros. En cuanto aquella «excesiva» riqueza queda agotada, el dirigismo pierde su razón de ser.

Perú caminó (gracias a su política intervencionista) hacia una economía autoritaria. En el período 1951-1993 poco difirieron entre sí los países latinoamericanos en lo referente a sus respectivos sistemas económicos y tampoco difirieron, dentro de cada país, los diversos partidos políticos. En lo referente al sistema económico existen dos grupos: los partidarios del estatismo; y los de la intervención. Los de la economía de

mercado para nada cuentan. Y la poca libertad económica que sobrevive, lejos de ser fruto de premeditada política económica, es consecuencia de los fracasos de la intervención.

Es difícil calcular cuántos dirigistas ya se han dado cuenta de que la intervención desemboca en el estatismo; y cuántos los que de buena fe siguen creyendo que defienden un sistema “intermedio”, una «tercera vía» al problema económico. Sin embargo, el dirigismo aspira a que sea el gobierno quien, en cada caso, decida: si conviene dejar a las cosas evolucionar con arreglo a las directrices del mercado o si conviene más recurrir a coactivas intervenciones. Ello implica que el intervencionista está dispuesto a respetar los deseos de los consumidores sólo mientras no produzca efectos que el gobierno desapruébe. Tan pronto como cualquier hecho económico desagrade al gobierno o a específico grupo de presión; se “movilizan las masas” para reclamar nuevos controles, restricciones e intervenciones. Hace tiempo que habría desaparecido todo rastro de economía de mercado a no ser por la ineficiencia de los legisladores; y la pereza, negligencia y aun corrupción de gran parte de los funcionarios públicos. Así, la gente va a tener que optar entre economía de mercado o estatismo. Y no les será posible evadir tan dramática elección recurriendo a “la tercera vía”.

El espíritu empresarial (pese al continuo sabotaje que ejercen gobiernos, partidos políticos y cúpulas sindicales contra el empresariado) todavía logra continuamente incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la producción, haciéndolas cada día más accesibles al numeroso público consumidor.

Sólo bajo un sistema que permita calcular pérdidas y ganancias, cabe recurrir a la mecánica gerencial, es decir, aquella mecánica que aplica el empresario cuando encomienda ciertas funciones subordinadas a sus gerentes a quienes reconoce determinada independencia y libertad de acción. Lo que distingue al gerente del técnico, es que dentro de su radio de acción, puede determinar cómo proceder para alcanzar el máximo beneficio posible. ¡Sin embargo, al gerente le es imposible, desempeñar esa específica función bajo el sistema estatista, donde no cabe el cálculo económico, la ponderación contable del capital ni la determinación de pérdidas y ganancias! Los sistemas estatistas pueden, no obstante, servirse aún de una clase cuasi gerencial gracias a que todavía les es posible calcular merced a los precios de mercado extranjeros. Así, la implantación del estatismo haría imposible el cálculo económico, dando paso al caos y la desintegración de la cooperación bajo el signo de la división del trabajo.

No tiene sentido calificar determinado período histórico como «época de transición». El mundo es cambiante. ¡Toda época es «época de transición»! Cabe distinguir los sistemas económicos: los sistemas perdurables de los sistemas transitorios los cuales son autodestructivos. La intervención es un sistema autodestructivo que desemboca en el estatismo. ¡Sin embargo, los países que han apostado por el estatismo podrán, seguir calculando, mientras el pueblo permanezca aferrado a la “primacía” del mercado y prohíba a sus autoridades controlar el área del mercado. Al estatismo le cabría (mientras así suceda) servirse del cálculo económico y actuar de modo distinto a como tendría que hacerlo si todos los países del mundo fuesen estatistas!

Es imposible que el mundo sea indefinidamente “mitad” socialista y “mitad” economía de mercado; y es impracticable la coexistencia de ambos sistemas económicos. Esa imposibilidad e impracticabilidad permitirá sobrevivir a los países

socialistas, donde se están produciendo situaciones caóticas, desintegración de la sociedad y pavorosa miseria de la gente. Pero ni un bajo nivel de vida, ni un progresivo empobrecimiento bastan para desmontar el sistema económico socialista. *Los sistemas económicos cambian, dando paso a sistemas económicos más eficientes, sólo cuando la gente es lo suficientemente inteligente como para advertir las ventajas del posible nuevo sistema.*